



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXI - N° 1330

Bogotá, D. C., jueves, 27 de octubre de 2022

EDICIÓN DE 26 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

www.secretariassenado.gov.co

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

PONENCIA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 203 DE 2022 CÁMARA

por medio del cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 30 años del departamento del Guaviare, se exalta su riqueza natural y se dictan otras disposiciones.

TRÁMITE LEGISLATIVO

El presente proyecto de ley fue radicado el 21 de septiembre de 2022 ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, de autoría del honorable Representante Jorge Alexander Quevedo y coautores honorable Representante María Fernanda Carrascal Rojas, honorable Representante Julia Miranda Londoño, honorable Representante Héctor Mauricio Cuéllar Pinzón, honorable Representante Luvi Katherine Miranda Peña, honorable Representante Juan Felipe Corzo Álvarez. Específicamente fue publicado en la *Gaceta del Congreso* dentro de los términos de ley.

Al proyecto de ley se le asignó el número 203 de 2022 Cámara. *por medio del cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 30 años del departamento del Guaviare, se exalta su riqueza natural y se dictan otras disposiciones.* Remito al pleno de la Comisión la mencionada iniciativa, la materia de que trata el proyecto de ley es competencia de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.

Mediante correo electrónico de fecha 6 de octubre de 2022, fui notificado del oficio CSCP-3.2.02.175/2022(IS) de la designación como ponente único por parte de la Mesa Directiva de la Comisión

Segunda Constitucional Permanente, a fin de rendir el informe de ponencia para primer debate.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1 OBJETO

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto conmemorar los 30 años de vida administrativa del departamento del Guaviare, circunscripción territorial que tiene natalicio con la Carta Política de 1991, de igual manera el proyecto de ley rinde público homenaje a sus habitantes y exalta la invaluable riqueza en flora y fauna que tiene el departamento, de igual manera se establece dentro de su cuerpo normativo proyectos de infraestructura y de carácter social, cultural, ambiental y turístico que repercutirán en el bienestar general de todos los Guaviarenses.

2 JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

Lo que pretende este proyecto de ley, de iniciativa parlamentaria, es buscar el asocio de la nación a la conmemoración de los 30 años de vida departamental del Guaviare, una región que se encuentra ubicada en el límite entre la Orinoquia y la Amazonía; un lugar envolvente, hospitalario, pulmón de la región Amazónica y de la Orinoquia, umbral de junglas de ensueño que esconden los secretos y la sabiduría de la tierra. Por ende, su conservación, cuidado y salvaguarda por parte del Estado Social y Democrático de Derecho es una tarea constante, imperecedera, pues obedece no solamente a principios de sostenibilidad y sustentabilidad, sino también a un llamado a la paz a lo largo y ancho del territorio guaviarenses, territorio de pujanza, armonía, fraternidad y acogida.

Departamento próspero en fauna y flora silvestres, de aguas cristalinas, montes imponentes, gente afable, culturas indígenas que entienden que el valor de la Tierra es incalculable.

Por lo mencionado anteriormente y según los preceptos técnicos que vamos a plasmar en la presente exposición de motivos, consideramos de vital importancia el asocio de la nación en la conmemoración de estos 30 años de vida departamental del Guaviare, razón por la cual resulta preponderante e importante, rendir homenaje a esta tierra y establecer una serie de proyectos que busquen mejorar las condiciones de vida de los guaviarenses, además de potencializar sus fortalezas en aras de convertirse en un destino turístico por excelencia en los ámbitos regional, nacional e internacional.

3 RESEÑA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

El Departamento del Guaviare está situado en el oriente de Colombia, en la zona de transición de la Amazonia y la Orinoquia. Sus más de 5,5 millones de hectáreas, que corresponden al 4,7 por ciento del país, lo convierten en el séptimo departamento más grande del territorio. Debido a su carencia de redes de transporte terrestre y aéreo, los ríos Guaviare, Inírida y Vaupés son navegables.

Basa su economía en la ganadería, que se concentra en el corredor San José-Calamar, y en cultivos en los diques del río Guaviare, cuerpo de agua que también se ve afectado por la extracción de gravillas. Guaviare cuenta con siete tipos de paisaje: planicie aluvial, valle aluvial, altillanura, lomerío estructural, lomerío erosional, macizo y peniplanicie.

Según la clasificación de tierras realizadas por el IGAC, Guaviare cuenta con cinco clases agrológicas, que van desde tierras aptas para cultivos y ganadería, para cultivos mezclados con frutales, suelos para desarrollo agroforestal y forestal, cultivos y terrenos sin aptitud agropecuaria.

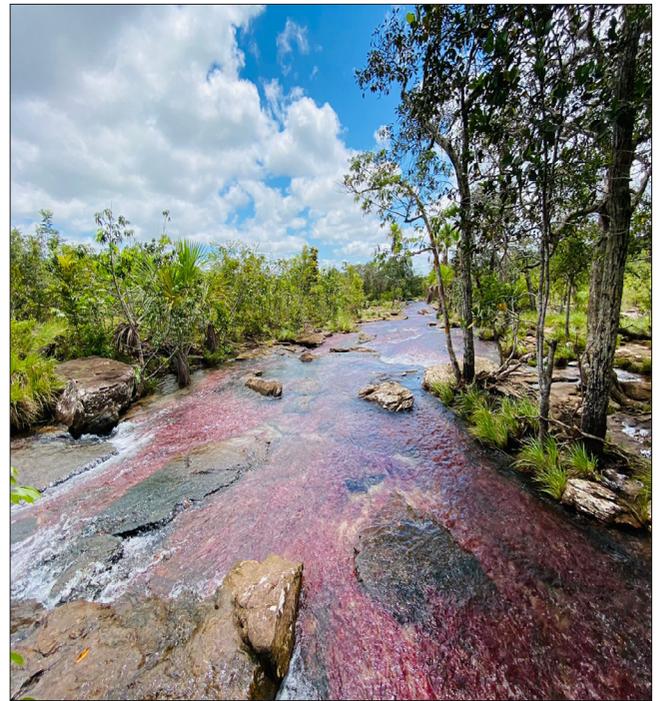
Solo cuenta con cuatro municipios: San José del Guaviare (capital), Calamar, El Retorno y Miraflores. Está ubicado en dos cuencas hidrográficas (la del río Orinoco y la del río Amazonas).¹

Esta circunscripción puede considerarse como un Departamento joven, pero la historia de su territorio no es incipiente, pues en la época pre independentista hizo parte de la Provincia de Popayán; posteriormente, en la Gran Colombia, entre los años 1821 y 1830, perteneció al Departamento de Boyacá; pero, tras la disolución de la Gran Colombia y hasta el año 1857, hizo parte del Departamento del Caquetá, departamento este que quedó subsumido por el Departamento del Cauca y en 1910, pasó a pertenecer a la Comisaría del Vaupés. Empero, el Departamento del Guaviare

fue creado el 4 de julio de 1991, por la Constitución Política de Colombia de 1991, pues anteriormente era una Comisaría creada el 23 de diciembre de 1977 y que, a la par, había sido segregada de la Comisaría del Vaupés, lo anterior mediante ley de la República número 55² (ya derogada por la Ley 2085 de 2021).

La capital del departamento es San José del Guaviare, el departamento cuenta con dos representantes a la Cámara por disposición constitucional, además de once corporados en la duma departamental.

El departamento del Guaviare tiene una población de 88.490 habitantes, según las cifras provisionales de las proyecciones poblacionales del DANE³. De igual manera cuenta con una extensión territorial de 53.460 kilómetros cuadrados



Fotografía de Tranquilandia en el Departamento del Guaviare.⁴

Es de anotar que el departamento del Guaviare colinda al norte con los departamentos de Meta y Vichada; al oriente con el departamento de Vaupés, al sur con el departamento de Caquetá y al occidente con el departamento del Meta.

En el Guaviare predominan las tierras planas, que en gran medida pertenecen a la cuenca amazónica; pero también, parte de sus tierras son las sierras de Chibiriquete, Tunahi, San José y los cerros de Campuna y Otare.

² Información tomada de la página del Departamento del Guaviare, <https://www.guaviare.gov.co/departamento/historia>

³ Perfil económico, oficina de estudios económicos, mayo del año 2022, Min Comercio, disponible en: <https://www.mincit.gov.co/getattachment/80427431-9da3-41c1-a063-9533854cfd14/Guaviare.aspx>

⁴ Fotografía de Tranquilandia, Departamento del Guaviare, imagen propia.

¹ <https://igac.gov.co/es/noticias/guaviare-un-departamento-pintado-de-verde-pero-afectado-por-la-deforestacion>

En relación a su clima, cabe resaltar que es cálido y la temperatura diaria oscila entre los 25 y los 30 grados centígrados y en algunas noches, la temperatura puede descender hasta los 12 grados centígrados; en especial, en las épocas de lluvia, que pueden ir de abril a julio y de octubre a noviembre de cada año.



En la imagen que aparece al lado izquierdo, podemos observar la ubicación del departamento del Guaviare, una ubicación privilegiada entre la selva amazónica y la región de la Orinoquia de esta magna nación, una ubicación que le permite ser poseedor de urdimbres de bosque, de verdes, de flores, árboles y frutales, verdes que luchan diariamente en contra del fenómeno de la deforestación, la cual año tras año parece elevar las cifras de hectáreas convertidas en potreros, ubicadas en el Arco Noroccidental Amazónico en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare.⁵

3.1 HIDROGRAFÍA

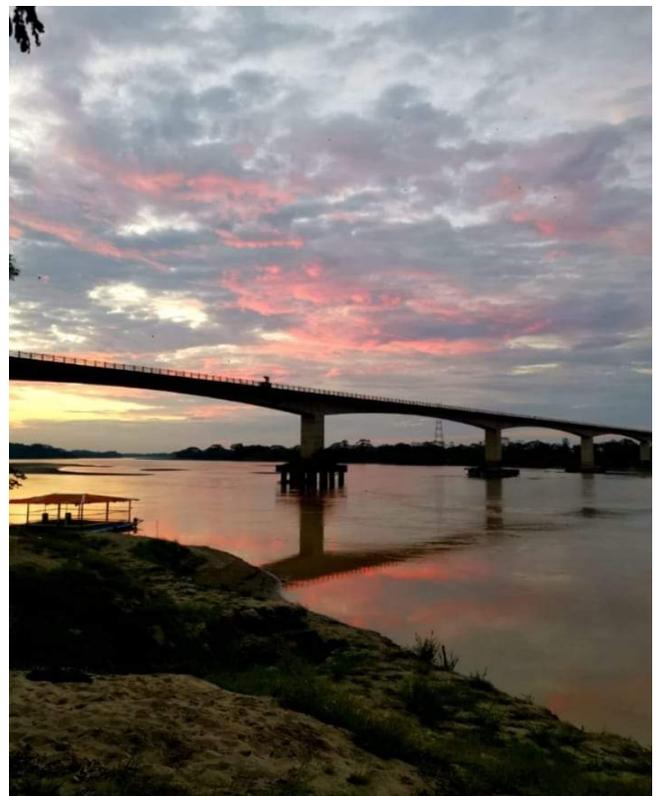
En cuanto a su hidrografía, el Guaviare se caracteriza por estar bañado por varios ríos y decenas de caños; el principal río es el Guaviare, que pertenece a la cuenca del río Orinoco, y es un río extenso que germina en la cordillera oriental y desemboca en el Orinoco. Dicho río atraviesa los departamentos del Guaviare, del Guainía y del Meta, contando con una longitud de aproximadamente 1.497 km cuadrados y una superficie de cuenca de 140.000 km cuadrados. Empero, del total de su longitud, tan solo unos 630 km son navegables.⁶

Por otra parte, existen el río Guayabero y el río Ariari, que conforman el río Guaviare, como ya se había advertido, y que, en efecto, hacen parte de la cuenca del Orinoco; nacen en la cordillera oriental

en el Parque Natural Cordillera Los Picachos. El río Guayabero cuenta con varios afluentes, entre los que se destacan Caño Cristales, río Losada, río Leiva, río Papamene y río Duda. Por la cuenca del Amazonas se resalta el río Vaupés, el río Unilla, el río Itilla, el río Apaporis y el río Macayá.

3.2 ECONOMÍA

Decantando ahora aspectos económicos del Guaviare, cabe resaltar que se trata de un territorio agricultor a gran escala; en especial, siendo productor de caña de azúcar, frutales y la ganadería; contando además con explotaciones de caucho y exportación de maderas. También gozan de una enorme preponderancia las actividades de caza y pesca, y cultivos que traen rendimientos económicos significativos para la región como son plátano, yuca, cacao, maíz, arroz, chontaduro, arazá, copoazú, uva, caimarona, guiatitutu o anón amazónico, cocona, seje, nuez de inchi



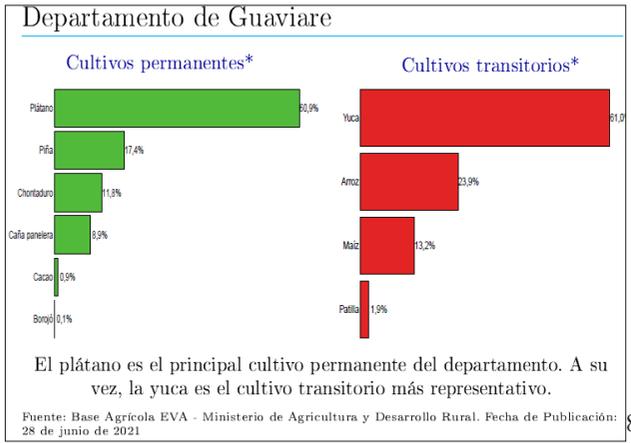
Su infraestructura, también se resalta gracias a un puente Nowen _fotografía⁷_ (lengua indígena para “Puerta Grande”) de 913,8 metros que atraviesa el Río Guaviare y une al Departamento del Guaviare con el Departamento del Meta, y así también, con el resto del país.

La economía del departamento del Guaviare gira alrededor del sector agropecuario. Son sus renglones legales más importantes, los servicios, la explotación forestal, la pesca, y en los últimos años, la ganadería y la agricultura, las que han tenido un gran impulso. Los principales cultivos son plátano, yuca, cacao, caña miel y caucho. Se destaca la ganadería vacuna extensiva o semiintensiva en las planicies de tierra firme.

⁵ Mapa de Colombia, con la ubicación del departamento, elaboración propia.

⁶ Información tomada de la página web Amazonas, disponible en <https://delamazonas.com/rios/rio-guaviare/>

⁷ Fotografía tomada de la red social twitter, <https://twitter.com/elllane94708234/status/1370595827459235846>



3.3 TURISMO Y CULTURA

El departamento cuenta con atractivos turísticos que reactivan la economía departamental, como son los balnearios de Agua Bonita y Agua Luz, las pinturas rupestres, el río Guayabero, el Caño Dorado, la Ciudad de Piedra, aguas termales únicas entre la Orinoquía y la Amazonía, parques naturales, y en sus aguas, el espléndido atractivo de los delfines rosados.

En el Guaviare germina la vida, se multiplica. Sus colores, al mezclarse con el arco iris, irradian alegría, pujanza, laboriosidad, sabor y esencia a Colombia; sus gentes entienden el significado de la tierra, la urgencia por encontrar en el campo no solamente una fuente de sustento, de albergue de especies que podrían estar en peligro de extinción; sino también un legado para la patria colombiana, un ejemplo vivo de lo que es la preservación y el respeto por un ambiente sano, desde las más altas aspiraciones del llamado constitucional a respetarlo y protegerlo.

En cuanto a los sitios turísticos, vale destacar prima facie a la Reserva Nacional Natural Nukak, la cual es una zona protegida de la Amazonía, toda vez que alberga diferentes ecosistemas, con variedad de especies protegidas de flora y fauna, que no solamente cobran relevancia para el Estado colombiano, sino también para el mundo entero. A su turno, la reserva en mención es reserva territorio ancestral de grupos indígenas como los Nukak, Curripaco y Puinave.

Con respecto a los Nukak, es de anotar que dicho pueblo habita entre los ríos Guaviare e Inírida, al sur oriente de Colombia. Habitualmente, se dedicaban a la caza y a la recolección de productos agrícolas y vivían en pequeños grupos; pero, con ocasión a horribles flagelos de violencia en el territorio colombiano, a manos de grupos armados ilegales y subversivos, los Nukak se han visto obligados inexorablemente a abandonar sus terruños y resguardos, albergarse en poblaciones aledañas y en el peor de los casos, migrar a las grandes ciudades. Ello, desde hace ya varias décadas, se ha convertido en una lúgubre sombra para estos pobladores que tan solo velan por la conservación de los legados de sus ancestros, pues ciertamente, al abandonar

sus tierras o al ser arbitrariamente despojados de ellas, nace la imperiosa necesidad de restaurar sus condiciones, tierras y costumbres. Los Nukak, que aún continúan en sus tierras, han tenido que establecer asentamientos fijos de aproximadamente ochenta personas, lo cual se convierte a todas luces en un atentado contra su naturaleza nómada, pues dentro de sus costumbres, solían movilizarse según sus relaciones de parentesco.

En el año 1993, el Gobierno colombiano reconoció después del despliegue de muchos esfuerzos de ONG, que los Nukak son un pueblo indígena con derecho a su territorio ancestral y hoy en día, su territorio alcanza casi un millón de hectáreas que se esparcen por la selva amazónica; no obstante, son punto de mira para muchas compañías, grupos de presión y otros intereses, que pueden ser una amenaza latente para la conservación de dicho territorio.

En consonancia con lo anterior, a través de la sentencia T-188 de 1993, proferida por la Honorable Corte Constitucional Colombiana, se esclareció la prohibición de vender o enajenar tierras que correspondan a resguardos indígenas, precisamente para preservar sus valores espirituales, pues sus tierras hacen parte de la cosmovisión indígena; valor que se decanta indeclinablemente en las culturas indígenas que habitan el territorio del Guaviare; y si bien es cierto que los resguardos cobran sus cimientos en la época colonial, perduran en el presente, pues más que entidades de carácter territorial, deben ser consideradas entidades de carácter espiritual, ancestral, cuya protección constitucional se vislumbra en el artículo 63 de la Constitución Política Colombiana, en los siguientes términos:

“Artículo 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”

Visto lo anterior, se resalta la inembargabilidad de las tierras indígenas; sin embargo, aunque no se surtan procedimientos legales o judiciales de tal envergadura, el Departamento del Guaviare sí se ha comprometido y se seguirá comprometiendo a evitar que grupos al margen de la ley usurpen tierras, provoquen desplazamientos forzados, aniquilen y abusen de sus pobladores; pues el pleno dominio y propiedad que los indígenas tienen sobre las tierras de sus resguardos no solamente se decanta en una protección de raigambre constitucional, sino también en una protección a través de instrumentos internacionales; verbigracia, el Convenio 169 de la OIT –Organización Internacional del Trabajo–.

4. OBRAS REPRESENTATIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

Para el departamento es de vital importancia la realización de decenas de obras que busquen mejorar

⁸ Perfiles económicos de los departamentos, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, año 2021

la calidad de vida de todo el pueblo Guaviareño, obras con impacto social, ambiental, cultural y deportivo, buscamos crear tejido social en un departamento que ha sido golpeado por el conflicto armado y el flagelo de la deforestación, un territorio que debe tener prioridad para el Estado colombiano por su aporte ambiental que se convierte en un pilar fundamental y en un baluarte del bioma amazónico.

Dado lo anterior, buscamos en el presente proyecto de ley que la nación se vincule a la celebración de los 30 años, con obras como el estadio departamental, el hospital y un parque solar; proyectos con enfoque deportivo, que están encaminados a salvaguardar derechos constitucionales como la vida, la dignidad y la creación de fuentes de energía alternativa sostenible que le permitirían al departamento crecer socialmente y mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes.

5 MARCO NORMATIVO

El marco normativo bajo el cual se encuentra argumentado el presente proyecto de ley encuentra su sustento en disposiciones contenidas en la Constitución Política colombiana. En primer lugar, el artículo 150 establece la competencia que tiene el Congreso de la República como rama legislativa del poder público para interpretar, reformar y derogar las leyes; el artículo 154 señala la facultad que tienen los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de la República de presentar proyectos de ley y/o de actos legislativos.

A su vez el artículo 334 de la Carta Política señala la facultad del Gobierno nacional de tomar la dirección de la economía del país, en relación con este artículo la presente iniciativa enfoca respecto de la función estatal en la dirección general de la economía y su intervención por mandato expreso de la ley, resaltando como uno de los fines el de promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones y municipios del país. Por su parte el artículo 341 superior señala la obligación del Gobierno nacional en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; y la prohibición constitucional de que no habrá rentas nacionales de destinación específica, con excepción de las previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 359 de la Constitución Nacional.

A su vez, la Corte Constitucional, en pronunciamiento calificado al año 2011 mediante Sentencia C-817 del 2011, señala lo siguiente referente a las leyes de honores: “La jurisprudencia constitucional ha fijado un grupo de reglas particulares acerca de la naturaleza jurídica de las leyes de honores, las cuales pueden sintetizarse del modo siguiente: (...) 3. El legislador puede adoptar diversas acciones para exaltar o asociar a la Nación a la persona, situación u organización objeto del decreto de honores, de manera tal que las categorías avaladas por la Corte solo tienen carácter enunciativo. Con todo, es factible identificar tres modalidades recurrentes de leyes de honores, a

saber (i) leyes que rinden homenaje a ciudadanos; **(ii) leyes que celebran aniversarios de municipios colombianos;** y (iii) leyes que se celebran aniversarios de instituciones educativas, de valor cultural, arquitectónico o, en general, otros aniversarios.” (negrilla y subrayado propio)⁹

De igual manera, es importante señalar que a la luz del numeral 3 del artículo 150 constitucional, se establece que corresponde al Congreso hacer las leyes y por medio de ellas ejercer funciones como “#3 Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos”. En el mismo sentido el numeral 11 del ya referido artículo establece que el Congreso de la República es el encargado de “establecer las rentas nacionales y los gastos de la administración”. Dicha función en concordancia con el artículo 345 superior el cual establece que no se podrá hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluida en el presupuesto de gastos y tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso.

Finalmente, en cuanto al sistema de cofinanciación la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C729/2005, manifestó que:

“Como ha sido explicado en la jurisprudencia de esta Corporación, la duplicación del gasto en las distintas esferas y la falta de una precisa alinderación de responsabilidades policivas, administrativas y presupuestales, socava el modelo de la autonomía territorial consagrado en la Constitución Política. Sin embargo, la norma citada prevé algunas excepciones (...) Es claro que mediante el sistema cofinanciación la nación puede concurrir con los departamentos, distritos y municipios en la realización de obras que en principio no le competen. A través de ese mecanismo la nación orienta la dinámica de la descentralización, al mismo tiempo que se estimula el desarrollo institucional y la eficiencia fiscal y administrativa de las distintas entidades territoriales”, en tanto ellas también aportan recursos para el financiamiento de sus obras, todo lo cual es expresión de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad señalados en el artículo 288 Superior.”¹⁰

6 IMPACTO FISCAL

Dando cumplimiento al artículo 7° de la Ley 819 de 2003¹¹ “Análisis del impacto fiscal de las

⁹ Corte Constitucional Colombiana, M P Luis Ernesto Vargas Silva, C- 817 de 2021, disponible en línea en, <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-817-11.htm>

¹⁰ Corte Constitucional Colombiana, M P Alfredo Beltrán Sierra, C-729 del año 2005, disponible en, <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-729-05.htm>

¹¹ Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue

normas”, debemos señalar que los gastos que se generen de la presente iniciativa legislativa se deben entender como incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión al cual haya lugar. Así las cosas, posterior a la promulgación del presente proyecto de ley, el Gobierno nacional deberá promover y realizar acciones tendientes a su ejercicio y cumplimiento. Lo anterior, con observancia de la regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo.

De conformidad con lo anterior, resulta importante citar un pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca del tema, el cual quedó plasmado en la Sentencia C-490 del año 2011, en la cual señala a renglón seguido.

“El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático.” (Negrillas propias).¹²

En el mismo sentido resulta importante citar el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia C-502/2007, en el cual se puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en una barrera, para que las corporaciones públicas (Congreso, asambleas y concejos) ejerzan su función legislativa y normativa:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Disponible en http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0819_2003.html

¹² Corte Constitucional Colombia, M P Luis Ernesto Vargas Silva, C-490 del año 2011, disponible en línea en, <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-490-11.htm> e

Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirán a concederle una forma de poder de veto al Ministerio de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento.”¹³

De conformidad con lo anterior, y como lo ha resaltado la Corte Constitucional, el análisis del impacto fiscal de las iniciativas parlamentarias que se presenten no puede ser una barrera para establecer disposiciones normativas que requieran gastos fiscales. Mencionando además que si bien compete a los congresistas y a ambas cámaras del Congreso de la República la inexorable responsabilidad de estimar y tomar en cuenta el esfuerzo fiscal que el proyecto bajo estudio puede ocasionarle al erario, es claro que es el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda, el que dispone de los elementos técnicos necesarios para valorar correctamente ese impacto, y a partir de ello, llegado el caso, demostrar a los miembros de la Rama Legislativa la inviabilidad financiera del proyecto de ley que en su momento se estudie, en este caso el que nos ocupa.

Con base en lo expuesto anteriormente, pongo a disposición de la Honorable Cámara de Representantes de la República de Colombia, la discusión y aprobación del presente proyecto de ley.

RELACIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS

De conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, que modifica el artículo 291 de la Ley 5ª de 1992, estableciendo la obligación del ponente del proyecto de presentar la descripción de las posibles circunstancias o eventos que podrán generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, frente al presente proyecto, se considera que no genera conflictos de interés, toda vez que la Iniciativa busca asociar a la Nación a la conmemoración de los 30 años del departamento del Guaviare, se exalta su riqueza natural.

Conforme a lo anterior, se considera que en los términos en que está planteado el presente proyecto de ley, salvo circunstancias específicas y particulares, no se configuran causales de conflicto de interés para los congresistas que participen en la discusión y votación del articulado.

PLIEGO DE MODIFICACIONES

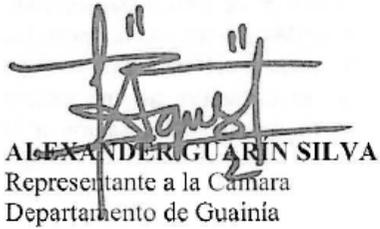
NO se presentan MODIFICACIONES al Proyecto de ley número 230 de 2022 Cámara, “Por medio del cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 30 años del departamento del Guaviare, se exalta su riqueza natural y se dictan otras disposiciones.”.

¹³ Corte Constitucional Colombiana, M P Manuel José Cepeda Espinosa, C- 502 del año 2007, disponible en, <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2007/C-502-07.htm>

PROPOSICIÓN FINAL

Con base en las anteriores consideraciones, presento ponencia **POSITIVA** y, en consecuencia, solicito a la Honorable Comisión Segunda Constitucional Permanente de Cámara de Representantes, aprobar en primer debate el proyecto de ley número 203 de 2022 Cámara, *“Por medio del cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 30 años del departamento del Guaviare, se exalta su riqueza natural y se dictan otras disposiciones.”*.

De los honorables representantes,



ALEXANDER GUARÍN SILVA
Representante a la Cámara
Departamento de Guainía

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 203 DE 2022

por medio del cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 30 años del departamento del Guaviare, se exalta su riqueza natural y se dictan otras disposiciones

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. *Objeto:* La presente ley tiene por objeto vincular a la nación para que se asocie y rinda un homenaje público al departamento del Guaviare, con motivo del cumplimiento de sus 30 años de vida administrativa.

Artículo 2°. La nación hace un reconocimiento al departamento del Guaviare; exalta su riqueza natural y cultural, y resalta las virtudes de sus habitantes, así como sus aportes al desarrollo social, cultural, turístico y económico de la región y del país.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, Ministerio del Deporte y Ministerio de Ambiente, para asesorar y apoyar al departamento del Guaviare, en la elaboración, tramitación, ejecución y financiación de los proyectos deportivos, culturales y ambientales que repercutan en el bienestar del pueblo guaviarense.

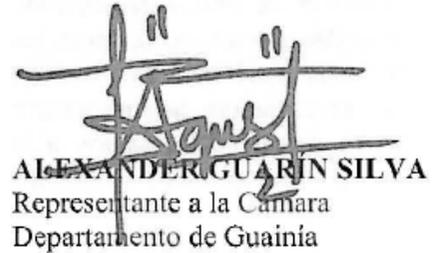
Artículo 4°. Autorícese al Gobierno nacional para que, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley, incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación e impulse a través del sistema de financiación o cofinanciación las partidas presupuestales necesarias con el fin de adelantar los siguientes proyectos de infraestructura y de carácter social, cultural y turístico en el departamento del Guaviare.

- Estadio Departamental.
- Hospital Departamental
- Parque solar de energía alternativa sostenible.

Artículo 5°. La autorización de gasto otorgada al Gobierno nacional, en virtud de la presente ley, se incorporará en el Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupuestal, en primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto, y en segundo lugar de acuerdo con las disponibilidades que se produzcan en cada vigencia fiscal.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación

De los honorables representantes,



ALEXANDER GUARÍN SILVA
Representante a la Cámara
Departamento de Guainía

* * *

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 120 DE 2022 CÁMARA

por medio del cual se modifican los artículos 67, 68, 69 y 189 de la Constitución Política, y se crea la Superintendencia de Educación

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

El Proyecto de Acto Legislativo número 120 de 2022 Cámara fue radicado el día nueve (9) de agosto de 2022 por los Honorables Representantes Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, Teresa de Jesús Enríquez Rosero, Alexander Guarín Silva, Diego Fernando Caicedo Navas, Milene Jarava Díaz, Ana Paola García Soto, Hernando Guida Ponce, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, Ana Rogelia Monsalve Álvarez, Julián David López Tenorio, Camilo Esteban Ávila Morales, José Eliécer Salazar López, Víctor Manuel Salcedo Guerrero, Julián Peinado Ramírez, Dolcey Óscar Torres Romero, Jorge Méndez Hernández, Óscar Hernán Sánchez León, Luis David Suárez Chadid, Marelén Castillo Torres, Hernando González y los Honorables Senadores, Norma Hurtado Sánchez, Juan Felipe Lemos Uribe y Alejandro Vega Pérez.

Posteriormente, suscribieron carta de adhesión como coautores los Honorables Representantes Luis Alberto Albán Urbano y Jairo Humberto Cristo.

Para Primer Debate fue designada como ponente única la honorable Representante Astrid Sánchez Montes de Oca.

El día veinte (20) de octubre de 2022 fue discutida en primer debate la iniciativa de Acto Legislativo número 120 de 2022 Cámara, “por medio del cual se modifican los artículos 67, 68, 69 y 189 de la Constitución Política, y se crea la Superintendencia de Educación”, aprobándose la misma con modificaciones.

Para Segundo Debate el suscrito fue designado como ponente único del presente acto legislativo.

2. OBJETO DE LA LEY

El presente Proyecto de Acto Legislativo tiene como objeto modificar los artículos 67, 68, 69 y 189 de la Constitución Política, con la intención de crear la Superintendencia de Educación, la cual, inspeccione, vigile y controle la educación que se brinda a niños, niñas, jóvenes, adolescentes y a todas las personas que reciben este servicio en Colombia.

La inspección, regulación, fiscalización, vigilancia y el control en el sector de la educación es de suma importancia para una sociedad. El cumplimiento de la misión de educar se logra con una adecuada inspección, regulación, fiscalización, vigilancia y control; mejoran los procesos, la calidad, su pertinencia, las condiciones en las que se realiza, el cumplimiento de la ley y el buen funcionamiento del sistema educativo en el marco de los principios rectores constitucionales y legales. La ausencia de un sistema de inspección, vigilancia y control desgasta el sistema educativo, debido a que su ausencia genera distorsiones y la toma de decisiones arbitrarias que pueden suceder en cualquier época, tiempo y lugar. Inspeccionar, Vigilar y Controlar son acciones administrativas esenciales, en la protección del desafío de impartir educación a las nuevas generaciones, razón por la cual, es pilar superior de quienes por Ley y dedicación asumen la tarea de optimizar el sistema educativo del país.

3. ANTECEDENTES

Desde hace más de un siglo y hasta antes de la expedición de la ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la Inspección, Vigilancia y Control del servicio público educativo estuvo bajo la responsabilidad de los supervisores escolares, quienes llegaban a estos cargos sin participar en un concurso de méritos. En su ejercicio, estos profesionales no eran vigilados, no los regulaba un periodo de prueba y menos aún se les aplicaba una evaluación de desempeño. En general, las funciones del cargo estaban supeditadas a los lineamientos de los secretarios de Educación y los lineamientos de los Planes de Desarrollo Territorial. La ausencia de funciones precisas obedecía a las limitaciones de las políticas públicas en el sector.

3.1. Ley General de Educación, y su regulación

En el año 1994, con la expedición de la Ley 115 General de Educación, se dotó al país de un mecanismo para controlar el sistema educativo, con el fin de ponerlo a salvo de las distorsiones u acciones arbitrarias. Una vez sancionada la Ley General de Educación, se logró expedir el Decreto 907 del 23 de mayo de 1996, se establecieron unas reglas más claras, aunque insuficientes, en materia de Inspección y Vigilancia.

El artículo 2° del Decreto 907 de 1996 señala el ámbito de aplicación en los siguientes términos:

“La inspección y vigilancia se ejercerá en relación con la prestación del servicio público educativo

formal y no formal y con las modalidades de atención educativa a poblaciones a que se refiere el Título III de la Ley 115 de 1994, que se preste en instituciones educativas del Estado o en establecimientos educativos fundados por particulares.

La inspección y vigilancia también se ejercerá en lo pertinente, sobre el servicio educativo informal que se ofrezca en desarrollo de los artículos 43 a 45 de la Ley 115 de 1994, sin perjuicio de las competencias que la ley haya asignado a otras autoridades”.

Así mismo, el artículo 3° del Decreto da cuenta del objeto en los siguientes términos:

“La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientada a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y exigir el cumplimiento de las leyes, normas reglamentarias y demás actos administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral”.

Este Decreto estableció que los aspirantes al cargo de Supervisor de Educación debían surtir el proceso de un concurso de méritos y cumplir los requisitos que allí se establecen Capít. 5, arts. 23 a 27.

En el año 2002, se expide el Decreto 1283 de junio 12 de 2002, norma por medio de la cual se organiza el sistema de Inspección y vigilancia para la educación preescolar, básica y media y recoge el espíritu del Decreto 907 de 1996. Es decir, con el Decreto 1283 el Estado fijó las reglas de juego del Sistema Nacional de Inspección y vigilancia en cabeza del Presidente de la República quien delegará en el Ministerio de Educación Nacional y, este a su vez, en los entes territoriales.

El sistema de inspección, vigilancia y control en su conjunto produce una controversial condición, pues el Presidente tiene las siguientes competencias: a) Definir, diseñar, reglamentar y mantener un Sistema de Información del sector educativo; b) Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del sector educativo en las entidades territoriales y el impacto en la sociedad; c) Vigilar el cumplimiento de las políticas nacionales y las normas del sector educativo en las entidades territoriales; d) Definir y establecer las reglas y mecanismos generales para la evaluación anual del personal docente y directivo docente; e) Aplicar a las entidades territoriales, a las instituciones educativas oficiales y privadas y a los funcionarios vinculados al servicio educativo estatal, cuando encuentre mérito para ello, los correctivos y las sanciones a que se refiere este decreto, previa observancia del debido proceso. f) Adoptar las acciones administrativas necesarias; (Cap. II, Art. 5°).

Las competencias del presidente, las funciones del Ministerio de Educación Nacional y de los entes territoriales, por ejemplo, se constituyen en juez y parte lo que propicia menor objetividad. En otros términos, la función supervisora de los servicios educativos en Colombia se ha confiado a las entidades territoriales certificadas, para el caso de los niveles de educación preescolar, básica y media y la educación para el trabajo y el desarrollo humano; para la educación superior la función se ha ejercido por el Ministerio de Educación Nacional, entidad que expide los lineamientos de la política para el sector y, que a su vez, ejerce la función de supervisar y evaluar la prestación del servicio educativo.

3.2. Inspección y Vigilancia en la Educación Superior

En cuanto a la educación superior, sólo hasta el 2014 se promulgo la Ley 1740: “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”. La cual tenía como finalidad establecer normas de la inspección y vigilancia en la educación superior de Colombia, que permitieran velar por la calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio, debido a que es necesario que en las instituciones de educación superior, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, para garantizar la autonomía universitaria constitucionalmente establecida” y que incluyó en su artículo 23 la intencionalidad de la creación de la superintendencia de educación.

El artículo 23 de la misma Ley 1740 establecía lo siguiente:

“Artículo 23: Trámites Para Superintendencia de Educación. Durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional, deberá presentar al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se cree la Superintendencia de Educación. Las normas que reglamenten la creación y el funcionamiento de la Superintendencia de la educación, quien tendrá la finalidad de garantizar el derecho a la educación, los fines constitucionales y legales de la educación, la autonomía universitaria, los derechos de los diferentes grupos de la comunidad académica, la calidad, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio educativo.” (Artículo declarado Inexequible bajo Sentencia C-031 de 2017)

4. INFORMACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN COLOMBIA

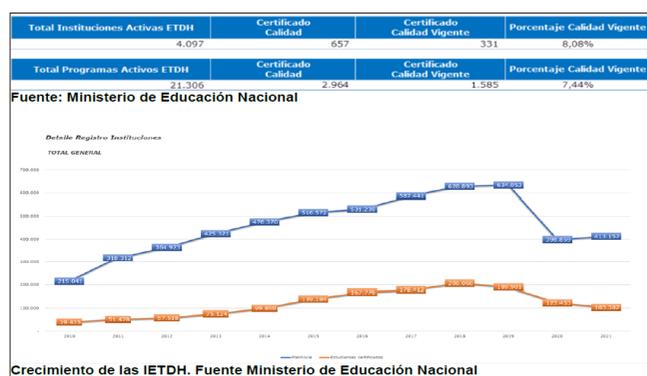
Según los datos reportados por el Ministerio de Educación Nacional, la matrícula privada en Colombia “es atendida por 11.264 establecimientos educativos, incluidas instituciones educativas que ofrecen al menos un grado de preescolar y los nueve grados de educación básica, centros educativos

y jardines infantiles. Dentro de este número de establecimientos, más del 1% tiene pendiente la aprobación oficial para su funcionamiento”. (Estadísticas Ministerio de Educación Nacional, 2021).

Pese a existir un mandato constitucional, la Ley 715 de 2001 en su artículo 15 consagró la “Destinación. Los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar la prestación del servicio educativo atendiendo los estándares técnicos y administrativos, en las siguientes actividades: 15.1. Pago del personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales”.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo anterior, la financiación para el reconocimiento de los salarios y prestaciones de ley para los supervisores deja de existir en el rubro de “Prestación del servicio”. Significa esto, que una función tan importante, como es la de la Inspección y Vigilancia, a partir de la Ley 715 de 2001, en el cargo de supervisor quedará, a futuro, sin financiación, siendo que solo se mantendrá en la nómina de directivos y docentes; y no a los actuales supervisores. Lo anterior muestra que no se ejercerá supervisión, vigilancia y control sobre las Instituciones educativas de preescolar, básica y media tanto oficiales como no oficiales; Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, las cuales son en un alto porcentaje ofrecidas por el sector privado y, desde luego, los parámetros de Calidad quedarán a merced de la voluntad de las Instituciones Educativas ocasionando distorsiones y arbitrariedades en el servicio.

El IETH o Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano hace parte del servicio público educativo, y debe ser ofrecido con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales, que conduzcan a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. Es imperioso incluir el número de Instituciones Educativas Privadas, oficiales en todo el país, para el trabajo y el desarrollo humano.



La Federación Nacional de Departamentos en un documento de abril de 2022 elaborado, en la página 53 del ítem de educación, mencionó:

“En 2016, el MEN realizó una encuesta a las entidades territoriales certificadas en educación para conocer el diagnóstico del macro proceso

de inspección y vigilancia; según las entidades encuestadas el 65,4% de los secretarios de educación son los responsables de ejercer la inspección y vigilancia en su jurisdicción, otros permiten que la subsecretaría, una dirección, una oficina y otra se encarguen de estas funciones. Sin embargo, el 69% de los encuestados manifestó que no tienen algún tipo de división territorial para ejercer esta función, con lo cual se dificulta la cobertura de toda su jurisdicción para el ejercicio de estas funciones” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

A pesar de que en la Ley 1740 de 2014, se aprobó por parte del legislativo la necesidad de crear la Superintendencia de educación, la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-031 de 2017, declaró la inexecutable del artículo 23 de la ley al no haber sido iniciativa del Gobierno nacional; sino por parte del Legislativo, a pesar de contar con el aval del Gobierno nacional, tal como se puede observar en algunos de los considerandos de la Corte en la sentencia, la cual, manifiesta:

(...)

“Sin embargo, desde la discusión y deliberación en comisiones conjuntas, se planteó la necesidad de crear una Superintendencia de Educación. Con tal propósito, en primer lugar, se hizo referencia a la importancia de contar con un organismo técnico y especializado dotado de servidores de altísimo nivel, alejado de cualquier injerencia de los distintos sectores políticos. Y, en segundo lugar, se expuso que la efectividad de las funciones de inspección y vigilancia depende de la existencia de una institución independiente frente al Ministerio, sobre todo cuando el control recae respecto de universidades públicas, en las que dicha cartera hace parte de los órganos de dirección.

(...)

Ante esta circunstancia, el debate sobre la creación de la Superintendencia de Educación se retomó en las Plenarias de Cámara y Senado, en dicho orden, en donde se presentó una proposición con el texto que corresponde al actual artículo 23 de la Ley 1740 de 2014, objeto de acusación. Precisamente, en la Cámara de Representantes, en sesión del 15 de diciembre de 2014, fue inicialmente aprobada la citada disposición, en cuyo debate se destacó que se trató de un texto concertado con el Ministerio de Educación Nacional y frente al cual la Ministra de aquél entonces otorgó su aval. Esta misma norma se replicó en el Senado de la República, en sesión del día 16 del mes y año en cita, en el que se decidió acoger el texto que finalmente había sido adoptado en la Cámara de Representantes.

Dentro de la explicación que se brinda en ambas cámaras frente al artículo en mención, se destaca que se trata de una disposición de aplicación mediata, por virtud de la cual se otorga un plazo perentorio al Gobierno nacional, sin que

se concedan facultades extraordinarias, para que este concurra ante el Congreso de la República mediante la presentación de una iniciativa legislativa, previamente discutida con los distintos actores del sector de la educación, en la que se defina el rol y el alcance de las facultades de la citada Superintendencia, con el fin de que ella asuma las potestades sancionatorias y de vigilancia especial que en la actualidad se encuentran a cargo del Ministerio de Educación Nacional. De esta manera, a juicio de los congresistas, se pretendía superar las dificultades previamente mencionadas respecto de la independencia y especialidad que se requiere en el órgano de control.” (Subrayado y negrillas fuera de texto).

El concepto de “autonomía universitaria”, se ha presentado, en el espíritu de algunas comunidades académicas, de diversa forma y, en general, para ciertas Instituciones de Educación Superior su aplicación desconoce los principios de responsabilidad, autorregulación, y privilegio del bien social.

Las formas distorsionadas de entender y aplicar la autonomía, concepto regulador del subsistema, ocasiona desarticulaciones en los fines del servicio afectando, e incluso en el derecho a la educación. A esto se une la multiplicidad de procesos y procedimientos académicos y administrativos en las Instituciones de Educación Superior (IES) muchas veces sin reglas claras de calidad. Estos dos elementos hacen del ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia y Control un procedimiento muy complejo. Ahora bien, para el logro de los objetivos, el sistema requiere de un talento humano calificado, con continuidad en su gestión y recursos tecnológicos de apoyo asunto que en muchísimos casos no corresponde ya sea por las formas de contratación o bien por las limitaciones en el número de profesionales requeridos para tal función.

Ahora bien, en cuanto al alcance de la autonomía universitaria, la Corte Constitucional en la Sentencia C-547 de 1994 precisó:

“La autonomía universitaria se concreta entonces en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. En ejercicio de esta, las universidades tienen el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Haciendo un análisis de las normas constitucionales que rigen este punto, se concluye que la autonomía universitaria no es absoluta, puesto que corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; y a la ley establecer las condiciones requeridas para la creación y gestión de los centros educativos, y dictar las disposiciones con arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus estatutos”.

5. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

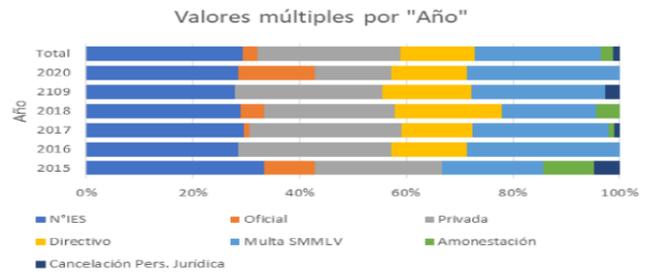
| | Oficial | Privada | Total |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| Universidades | 33 | 53 | 86 |
| Inst. Univ. | 31 | 102 | 133 |
| Inst. Tecnológicas | 10 | 37 | 47 |
| Ins. Técnicas Profesionales | 9 | 21 | 30 |
| Total | 83 | 213 | 296 |

Número de Instituciones de Educación superior en Colombia –Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana. 24 de abril de 2022

La Inspección y Vigilancia en la educación superior (Universidades, Instituciones Universitarias, Instituciones Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales), desde la promulgación de la Constitución del 1991 y antes de la misma, ha sido ejercida por una dependencia del Ministerio de Educación denominada “Subdirección de Inspección y Vigilancia”, que como se aprecia, ni siquiera tiene el alcance de una dirección, lo cual implica serias limitaciones en cuanto a talento humano, ocasionando que la operación en terreno sea bastante limitada o se ejerza a través de personal contratado por la modalidad de “prestación de servicios”.

Diversos doctrinantes han indicado que el Estado puede y debe intervenir la educación superior en procura de calidad, eficiencia y equidad. “La autonomía es relativa en la medida en que se encuentra articulada, de una parte, a la naturaleza y exigencia de la producción intelectual y, a la dimensión ético social del mismo y de otra, a las implicaciones del servicio público que tiene de forma textual la Constitución Política de 1991 en su artículo 67.

Ese carácter de servicio público significa que si el Estado no interviene podría producirse del mismo una cantidad no óptima ya sea de formación profesional, investigación formativa o básica, y de las labores de extensión. En tal sentido el Estado interviene en procura de la calidad, eficiencia y equidad del servicio que se presta. El fundamento de esta tesis está en el hecho de considerar la educación como un derecho humano, que tiene una finalidad social en sí mismo, es decir, el desarrollo y crecimiento integral de la persona como miembro de una comunidad y como un todo (artículo 67 C.N.). En razón a ello el Estado, la sociedad y la familia son responsables de este postulado esencial, y de las condiciones en que se presta. Aquí radica la fuerza del interés social que implica el servicio educativo, independiente de la Institución que lo preste. Por estas razones el Estado regula y ejerce la suprema inspección y vigilancia, con el fin de velar por su calidad; por su pertinencia; por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación ética, moral, intelectual y física de los educandos”.



| Año | N° IES | Privadas | Públicas | Directivo | Multa SMMLV | Amonestación | Cancelación Personería Jurídica | Inhabilidad |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 2015 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 2016 | 6 | 6 | | 3 | 6 | | | |
| 2017 | 29 | 28 | 1 | 13 | 25 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 | 13 | 11 | 2 | 9 | 8 | 2 | | 2 |
| 2019 | 10 | 10 | | 6 | 9 | | 1 | |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
| Total | 67 | 61 | 6 | 32 | 54 | 5 | 3 | 4 |

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados MEN Sanciones 2015-2020. Noviembre 11 de 2021

De acuerdo con los datos provenientes del Ministerio de Educación Nacional, en el periodo que va de 2015 al 2020 las Instituciones de Educación superior privadas han sido más sancionadas mientras que las oficiales lo han sido en menor proporción. A nivel de los directivos, el mayor número de sanciones tuvo lugar en el año 2017 con una amonestación y dos inhabilidades. La sanción más recurrente es la de la multa, siendo la de menor frecuencia, la cancelación de las personerías jurídicas. Esta información refleja múltiples problemas entre los cuales puede considerarse el mal uso de la autonomía universitaria la cual se traslada, al manejo de los recursos financieros, la prestación del servicio, la oferta de programas de formación sin los requisitos de ley, entre otros.

Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional manifiesta que cuenta en la Subdirección de Inspección y Vigilancia con dieciocho (18) funcionarios¹; pero dentro del “Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de personal de Ministerio de Educación Nacional”, establecido en la Resolución número 023408 de 2020, solo estipulan quince (15) cargos.

Ahora bien, desde la expedición de la Ley 1740 de 2014, según la respuesta emitida por el Ministerio de Educación Nacional se han recibido hasta el **12 de julio de 2022** un total de **97.051** derechos de petición, el cual se relaciona a continuación.

Tabla 4. Derecho de petición de la Subdirección de Inspección y Vigilancia 2015-2022

| Vigencia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total, General |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| Número de solicitudes | 9.826 | 10.298 | 8.672 | 9.514 | 11.804 | 17.215 | 20.290 | 9.432 | 97.051 |

Fuente: MEN - Subdirección de Inspección Vigilancia. Corte a 12 de julio de 2022

6. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

6.1 Constitución Política de 1991

“Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

¹ Respuesta a Derecho de Petición. Radicado MEN 2022-ER-312827

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”.

“Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.

El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.”

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.
2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.
3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.
4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.

(...)”

“Artículo 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.”

“Artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente.

El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara.

En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero.”

6.2 LEGAL

• LEY 5ª DE 1992. Por la cual se expide el Reglamento del Congreso

“Artículo 6º. Clases de funciones del Congreso. El Congreso de la República cumple:

(...)

2. Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación.

(...)”

Artículo 139. Presentación de proyectos. Los proyectos de ley podrán presentarse en la Secretaría General de las Cámaras o en sus plenarias.

Artículo 140. Iniciativa legislativa. Pueden presentar proyectos de ley:

Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las bancadas.

(...)”

“Artículo 222. Presentación de Proyectos. Los proyectos de acto legislativo podrán presentarse en la Secretaría General de las Cámaras o en sus plenarias.”

“Artículo 223. Iniciativa Constituyente. Pueden presentar proyectos de acto legislativo:

1. El Gobierno nacional.
2. Diez (10) miembros del Congreso
3. Un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento (5%) del censo electoral existente en la fecha respectiva.
4. Un veinte (20%) por ciento de los Concejales del país.
5. Un veinte (20%) por ciento de los Diputados del país.

• Ley 3ª de 1992. Por la cual se expiden normas sobre las comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones.

“Artículo 2º. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes funcionarán Comisiones Constitucionales Permanentes, encargadas de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referente a los asuntos de su competencia.

Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las Cámaras serán siete (7) a saber:

Comisión Primera.

Compuesta por diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y cinco (35) en la Cámara de Representantes, conocerá de: reforma

constitucional; leyes estatutarias; organización territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratación administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la administración nacional central; de los derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos étnicos. (Subrayado por fuera del texto).

(...)"

• **Ley General de Educación: Ley 115 de febrero 8 de 1994**

“Artículo 8°. *La sociedad.* La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. Colaborará con este en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento de su función social.

La sociedad participará con el fin de:

- a) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de toda la Nación;
- b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la educación;
- c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades e instituciones responsables de su prestación;
- d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas;
- e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y
- f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

7. DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS

Durante la discusión se presentaron quince (15) proposiciones incluida una de archivo por parte de la Representante Piedad Correal, la cual fue negada por la mayoría de la Comisión.

De las quince (15) proposiciones se acogieron un total de seis (6) proposiciones a saber:

| Artículo | Honorable Representante | Objetivo de la Proposición |
|----------|---------------------------|--|
| 1 | Juan Manuel Cortez Dueñas | Modificar el inciso 7 del texto propuesto, para dar una mayor claridad. |
| 2 | Juan Manuel Cortez Dueñas | Modificar el inciso 5 del texto propuesto, para dar una mayor claridad. |
| 2 | Carlos Felipe Quintero | Adicionando un inciso nuevo entre los incisos 6 y 7, para determinar una educación con modelos diferenciales para los grupos campesinos, con el ánimo de potencializar sus capacidades. |
| 2 | Carlos Felipe Quintero | Modificando los incisos 6 y 7 del texto propuesto, con el ánimo de garantizar una educación que respete la identidad cultural de los grupos étnicos; y la reducción de la deserción escolar. |
| 2 | Juan Manuel Cortez Dueñas | Modificando el inciso 5 del texto propuesto, con el ánimo de ampliar las prohibiciones de discriminación y no solo por la religiosa. |

| Artículo | Honorable Representante | Objetivo de la Proposición |
|----------|-------------------------|---|
| 3 | Alirio Uribe | Modificando el inciso final, para ir garantizando el acceso gratuito a la Educación Superior. |

Frente a las otras ocho (8) proposiciones, las mismas fueron dejadas como constancias y se relacionan a continuación:

| Artículo | Honorable Representante | Objetivo de la Proposición |
|----------|--|--|
| 1 | Carlos Felipe Quintero Juan Carlos Lozada | Eliminando los incisos 6 y 7 del texto propuesto. |
| 1 | Carlos Felipe Quintero | Modificando el inciso 3 del texto propuesto, para dejar como obligatoria la educación desde los cinco (5) a los dieciocho (18) años, hasta la educación media; y dejando de forma progresiva la educación superior. |
| 1 | Andrés Felipe Jiménez Vargas | Modificando los incisos 3, 5 y 6 del texto propuesto, eliminando la obligatoriedad de la Educación Superior, que la regulación y garantía de la calidad educativa sea solo para la educación pública; y para que la Superintendencia solo vigile y controle a la educación básica y media. |
| 1 | Álvaro Leonel Rueda Caballero | Modificando los incisos 1, 2 y 3 del texto propuesto; y adicionando un párrafo transitorio; con el ánimo de ajustarlo a los lineamientos de las Naciones Unidas; y ampliando el marco de formación de los educandos en principios, valores y comportamientos éticos. |
| 2 | Alirio Uribe | Modificando el inciso 4 del texto propuesto. |
| 4 | Juan Carlos Lozada | Eliminando la frase “a través de la superintendencia de educación” |
| Título | Juan Carlos Lozada | Eliminando la frase “y se crea la superintendencia de educación” |

8. CONSIDERACIONES DEL PONENTE

Para nadie es un secreto, las falencias en el Sistema actual de inspección vigilancia y control en todos los niveles y formas educativos; nos ha traído un retraso en el avance de la calidad y pertinencia en la educación que reciben nuestros educandos. A diario, aparecen noticias con relación a problemáticas y escándalos en los programas de alimentación escolar, en los contratos de infraestructura educativa, en la mala disposición, administración y la pérdida de recursos destinados a la educación, a la violación y vulneración de los derechos de los alumnos, docentes y representantes de los estamentos y miembros de las comunidades educativas, en la falta de conectividad en las diferentes instituciones educativas en las zonas rurales y más apartadas del país y con la pérdida de la acreditación en Alta Calidad de algunas Universidades del país; y todo esto se debe a la débil o falta de inspección, vigilancia y control por parte del Estado.

Como se ha mencionado a través de este proyecto, el Estado colombiano es un estado reactivo a las diferentes problemáticas planteadas, como pasó cuando se expidió la Ley 1740 de 2014 con el fin de poder intervenir a las Universidades y garantizar la prestación y continuidad del servicio educativo; este proyecto no es más que una respuesta a las

necesidades actuales e imperiosas de tener un mayor control en todos los ámbitos del sector de una forma independiente a la entidad que genera las políticas y lineamientos de la educación en Colombia.

Es de recordar que ya existe una Superintendencia de rango Constitucional, como lo es la Superintendencia de Servicios Públicos establecida en el artículo 370 superior; y la misma fue discutida en la Gaceta Constitucional N° 85; donde los ponentes de la Asamblea Nacional Constituyente², analizaron más de veintisiete (27) iniciativas con relación a los servicios públicos, en donde manifestaron los siguiente:

“Aparece dentro de los objetivos sociales del Estado porque su incidencia en ese campo es evidente puesto que en la medida que los servicios públicos se presten a toda la población con regularidad, la calidad de vida de aquella se mejora y, con esta, se logra el bienestar general.

El interés para que la problemática de los servicios públicos se trate al más alto nivel normativo lo demuestra el gran número de propuestas presentadas en las mesas de trabajo y en las Comisiones Preparatorias reunidas en los meses previos a la instalación de la Asamblea, todas las cuales se tuvieron en cuenta en la subcomisión.

(...)

El primer artículo (Artículo 6°) que se refiere a los servicios públicos en general y en abstracto, contiene lo siguiente:

El primer inciso califica a los servicios públicos como parte de la soberanía del Estado, diciendo que “son inherentes” a la finalidad social de aquel, es esta la parte más importante del articulado, pues considera este sector de la economía, íntimamente ligado a la responsabilidad del cuerpo social, obligando al Estado a asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. El encabezamiento del articulado reconoce, entonces, la importancia sustantiva que han adquirido los servicios públicos como realidad y como entelequia constitucional.”

Dentro del debate inicial, se nos indicó que esta iniciativa es inconstitucional, toda vez, que se estaría vulnerando los artículos 150 numeral 7 y 154 de la Constitución Política que establecen:

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(...)

7. *Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades*

del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta.

(...)”

“Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución.

No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a), b) y e), del numeral 19 del artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.

Es de recordar, que esta restricción hace alusión a la creación, supresión o fusión de entidades de tipo legal y no de carácter constitucional como lo es nuestro caso, es decir que; si la intención fuese de crear, suprimir o fusionar entidades por vía legal, esta iniciativa debería ser de origen gubernamental, ya que cómo lo indican los artículos superiores señalados es que dicha competencia es **exclusiva** del ejecutivo.

Adicionalmente, durante el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, en diversas ponencias se propuso reconocer la existencia de otras ramas del poder, distintas a las tradicionales, entre las cuales estarían la rama de control y la electoral.

Finalmente, se decidió continuar con el modelo tripartito de división de los poderes, pero admitiendo la existencia de otros órganos autónomos e independientes. Al respecto preceptúa el artículo 113 de la Carta:

“Artículo 113. Son ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

En consecuencia, en el Capítulo I del Título V de la Constitución, acerca de la estructura del Estado, se hace referencia ya no únicamente a los órganos de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, sino también al Ministerio Público, a la Contraloría General de la Nación y a la Organización Electoral. Además, debe agregarse que en la Constitución

² Carlos Lemos Simmonds, Rodrigo Lloreda Caicedo, Carlos Ossa Escobar, Óscar Hoyos Naranjo, Ignacio Molina Giraldo y Antonio Yepes Parra.

también se le reconoce autonomía al Banco de la República y a la Comisión Nacional de Televisión.

Es así como el principio de separación de poderes instituido en nuestra Constitución Política, consiste en que ninguna de las Ramas del Poder Público está habilitada para superponerse sobre otra, de modo que le impida el ejercicio cabal de sus competencias, sin perjuicio de la colaboración que debe existir entre estas.

Ahora bien, la iniciativa aquí discutida es un Acto Legislativo que es uno de los tres mecanismos contemplados para reformar la Constitución Política, que, podrán ser presentados en los siguientes términos:

*“Artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, **DIEZ MIEMBROS DEL CONGRESO**, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente.*

El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara.

En este segundo período solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero.” (Subraya fuera de texto)

De acuerdo con la Constitución Política, el Congreso de la República se encuentra facultado para presentar proyectos de Actos Legislativos que deriven en reforma Constitucional, para el efecto, deberán cumplir con los términos y plazos determinados en el artículo transcrito.

Es preciso señalar que dicha facultad no es absoluta, pues además de cumplir con los plazos y términos contenidos en el citado artículo 375 Constitucional, el artículo 241 numeral 1 y el artículo 379 de la Constitución destacan que las reformas constitucionales podrán ser declaradas inexecutable; en ese sentido, se tiene que, con el fin de evitar un reformismo excesivo, la Corte Constitucional tiene la competencia para revisar los actos reformatorios por vicios en su formación, cuando estos sean demandados a través de la acción de inconstitucionalidad.

Al respecto la Corte Constitucional bajo la Sentencia C-294 de 2021³ estableció lo siguiente:

“(…)

48. La Corte ha sido enfática en reiterar que el control constitucional de los actos legislativos no puede convertirse en un control normativo material, y por esa razón, el juicio de sustitución configura una metodología que limita también la competencia del juez constitucional. Lo anterior encuentra sustento en dos razones:

“(i) toda reforma constitucional, por definición, contradice el texto que modifica, de modo que resultaría un contrasentido afirmar que el texto reformado tiene índole ultra activa, para efectos del control de constitucionalidad; y (ii) tanto el texto reformado, comprendido como disposición, como la modificación tienen el mismo carácter de normas superiores, razón por la cual no es viable considerar que el primero sirva de parámetro para el control del segundo. Es decir, no existe una relación jerárquico-normativa entre el contenido de las distintas disposiciones que hacen parte de la Constitución originalmente promulgada y el texto de la reforma constitucional”.⁴

49. En igual sentido, la jurisprudencia ha establecido que existen al menos tres mecanismos a través de los cuales se restringe la competencia del juez constitucional ante el control de un acto reformatorio de la Constitución: “(a) la cualificación de la acción pública de inconstitucionalidad, (b) la necesidad de conservar la precisión conceptual sobre la materia y (c) la sujeción a una metodología particular para adelantar el juicio de sustitución”.⁵

50. En síntesis, el poder de reforma que ejerce el Congreso de la República se encuentra sujeto a los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley. La competencia del órgano legislativo para expedir actos reformatorios de la Carta Política no es ilimitada puesto que existen elementos identitarios y definitorios de la Constitución que la someten a un escrutinio riguroso. El juicio de sustitución se configura como una herramienta que le permite al juez constitucional revisar si el ejercicio del poder de reforma fue sobrepasado; pero a la vez, es una metodología de control constitucional que previene de realizar un juicio material del acto reformatorio.”

Ahora bien, según Diego Escallón fundador de la “Fundación Help para reducir la deserción en la educación” y profesor de la Universidad de los Andes en su artículo publicado por la Revista Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación⁶, de la Universidad de los Andes denominado *“La Superintendencia de Educación*

⁴ Corte Constitucional, Sentencia C-084 de 2016 (M P Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; SV Jorge Iván Palacio; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Alberto Rojas Ríos). Se cita como precedente la Sentencia C-577 de 2014.

⁵ Corte Constitucional, Sentencia C-288 de 2012 (M P Luis Ernesto Vargas Silva; AV Mauricio González Cuervo; AV Nilson Pinilla; SV Humberto Antonio Sierra Porto).

⁶ Volumen 9, N° 2, páginas 144-164.

³ M. P. Cristina Pardo Schlesinger

y otras recomendaciones para mejorar la calidad de la educación en Colombia”; hace un recuento de los diferentes estudios académicos que establecen los beneficios de la inspección y vigilancia, como lo es tener una información más fiable y pertinente con el ánimo de estimular el mejoramiento de las instituciones de educación; también nos señala la dificultad que tiene la misma, al mencionar que en Nigeria se evidenciaba que los inspectores no visitaban las zonas rurales alejadas; algo que es muy similar en nuestro país.

De este estudio es importante traer a colación las conclusiones a las que llegó el señor Escallón, las cuales relaciono a continuación:

“Este documento evidencia la debilidad de la institucionalidad y la normatividad de inspección y vigilancia en la educación de Colombia, lo que genera que el Estado no cuente con una de las herramientas para responder a sus necesidades de mejorar la calidad y fortalecer un servicio que debe contribuir a reducir la desigualdad del país.

Mejorar la calidad de la educación en Colombia supone modificaciones, acciones y decisiones sistémicas, una revisión de todo el sistema educativo, y exige un Estado fuerte que vigile e inspeccione los estándares de política pública educativa y sancione a aquellos que no los cumplan. Por esto, se debe fortalecer la institucionalidad del sistema de inspección y vigilancia en todos sus niveles y unificar el régimen de manera clara, expresa y concisa, al igual que modificar su esquema organizacional.

La literatura y las experiencias internacionales han evidenciado los efectos positivos de estas acciones en la calidad de la educación y en el fortalecimiento de los sistemas educativos. La inspección y vigilancia debe ejercerse para evaluar y guiar a los establecimientos educativos, acompañada de medidas coercitivas para controlar los posibles incumplimientos, con miras a proteger a los estudiantes y a facilitar la labor de los padres de familia y de los jóvenes al elegir las instituciones educativas en las que van a estudiar.

Por esto, es necesario unificar el sistema normativo de inspección y vigilancia en la educación para promover las herramientas preventivas, la supervisión de los establecimientos educativos y crear una institucionalidad fuerte capaz de vigilar, inspeccionar y, cuando haya una mala prestación del servicio, sancionar a través de la Superintendencia de Educación de Colombia.

Estas medidas contribuirán a fortalecer el sistema, mejorar su calidad, y que el Ministerio y los entes territoriales puedan enfocarse en fomentar la educación, asistir técnicamente a las instituciones, y que haya un organismo independiente y autónomo para vigilar la educación. Así, el sistema educativo colombiano transitará hacia un modelo de instrucción diferenciada, en donde el Estado asume mayor capacidad y competencia sobre el sistema educativo para asegurar y vigilar su calidad. Todas estas medidas siempre dirigidas a una educación de

calidad que rompa, en efecto, las brechas sociales existentes y que invariablemente tenga al estudiante como el centro de la política pública.”

La inspección, vigilancia y control del servicio público educativo en los niveles de Preescolar, Básica y Media y la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano se hace por las entidades territoriales certificadas, y la inspección, vigilancia y control del servicio de educación superior lo hace el Ministerio de Educación Nacional conforme a la Ley 1740 de 2014. Es imperioso que el Ministerio de Educación Nacional no sea juez y parte, puesto que, por un lado, es quien define las políticas de educación y por el otro, es quien realiza el control a las normas que el mismo expide, ambigüedad que lo convierte en una sola institución que administra, dirige planea y controla, lo cual, es inconveniente para prestar un servicio óptimo.

Actualmente en Colombia las entidades que hoy ejercen la inspección, vigilancia y control del servicio educativo no cuentan con personal y equipos especializados suficientes que no permiten controlar toda la extensión territorial del país, ocasionando que la inspección, vigilancia y control que se realiza en las diferentes partes del país no cuente con los recursos ni con los profesionales del mismo nivel.

En definitiva, pese a la existencia de toda una normativa que regula la inspección y vigilancia, en el sector educativo, es importante resaltar que el Ministerio de Educación Nacional, y las Secretarías de Educación deben cumplir, al mismo tiempo, con las funciones de fomento, asesoría y el acompañamiento a las instituciones educativas, lo que ocasiona varias dificultades a la hora de ejercer la vigilancia, inspección y control en la práctica, a saber:

1. Las responsabilidades atribuidas al Ministerio de Educación al ser la autoridad que se encarga de definir las funciones de liderazgo estratégico y de asistencia técnica y a su vez las funciones de vigilancia conllevan a que esta autoridad al mismo tiempo sea juez y parte en la dirección y la supervisión del sistema de educación.
2. Deficiencia de recursos destinados para el ejercicio de supervisión que recae a su vez en la falta de personal para que ejerza las funciones de inspección y vigilancia en relación con el amplio universo de vigilados.
3. En lo que refiere la educación para el trabajo y el desarrollo humano no hay una unidad o una estructura administrativa en las secretarías de educación que ejerza la función.

La educación y su prestación es uno de los elementos que nos hace iguales, el conocimiento no tiene estratos, porque tan educado debe ser un joven de estrato uno (1) como el joven de estrato seis (6), solo se necesita vigilar, controlar e inspeccionar la calidad prestada en la educación, en la cual, el

programa que recibe uno u otro estudiante sea de la mejor calidad y con pertinencia en todo el país.

Adicionalmente, los estudiantes y padres de familia deben contar con una instancia técnica y especializada que los escuche, atienda sus reclamos y haga efectivos sus derechos ante los establecimientos educativos y las entidades territoriales y nacionales. No puede haber quejas o reclamos sin respuesta oportuna. El sector Educativo debe contar con el mejor procedimiento de inspección, vigilancia y control.

Cómo se observa, las falencias en nuestro país son grandes; y no podemos decir que con sólo la

Superintendencia de Educación se van a eliminar estas falencias; pero sí es un paso importante para mejorar en calidad y pertinencia para nuestros educandos como eje central de la política pública educativa.

Para concluir, se debe lograr la separación de la política pública de inspección, vigilancia y control de las políticas públicas que desarrollen la prestación del servicio público de educación en Colombia; para así lograr la integración, articulación y coordinación de toda la política pública de inspección, vigilancia y control del sistema educativo colombiano en sus diferentes niveles, formas y modalidades.

9. PLIEGO DE MODIFICACIONES

| Texto aprobado en Primer Debate | Texto Propuesto para Segundo Debate | Observación |
|---|---|---|
| <p>“Por medio del cual se modifican los artículos 67, 68, 69 y 189 de la Constitución Política, y se crea la Superintendencia de Educación”</p> <p>Artículo 1°. Modifíquese el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura; y deberá ser de calidad y con pertinencia.</p> <p>La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo, el deporte y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.</p> <p>El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria desde la educación inicial, entre los cero (0) y cinco (5) años, hasta la educación superior.</p> <p>La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.</p> <p>Corresponde al Estado regular y garantizar la calidad de la educación desde la primera infancia hasta la superior; el cumplimiento de sus fines, la formación integral, moral, ética, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.</p> | <p>“Por medio del cual se modifican los artículos 67, 68, 69 y 189 de la Constitución Política, y se crea la Superintendencia de Educación”</p> <p>Artículo 1°. Modifíquese el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura; y deberá ser de calidad y con pertinencia, <u>con el objeto de formar personas capaces de alcanzar la felicidad y de aportar el desarrollo económico del país.</u></p> <p>La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; <u>en principios y valores que garanticen comportamientos éticos sobre el respeto a la vida, a la honra de las personas, a la diversidad étnica y cultural, a los bienes y recursos del Estado y de las personas; en la generación de riqueza y el desarrollo de inteligencia financiera</u> y en la práctica del trabajo, el deporte y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.</p> <p>El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria desde la educación inicial, entre los cero (0) y cinco (5) años, hasta la educación superior <u>en igualdad de condiciones, inclusiva, de calidad y pertinencia para todas las personas.</u></p> <p>La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.</p> <p>Corresponde al Estado regular y garantizar la calidad de la educación desde la primera infancia hasta la superior; el cumplimiento de sus fines, la formación integral, moral, ética, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.</p> | <p>Se acogen las modificaciones propuestas por el honorable Representante Álvaro Leonel Rueda Caballero a los incisos 1 y 2.</p> <p>Se acoge parte de la modificación propuesta por el honorable Representante Juan Daniel Peñuela al inciso 3.</p> <p>Se ajusta la redacción del inciso 6, para una mayor claridad.</p> |

| Texto aprobado en Primer Debate | Texto Propuesto para Segundo Debate | Observación |
|--|---|--|
| <p>El Estado, a través de la Superintendencia de Educación, ejercerá la suprema inspección, control y vigilancia sobre los prestadores del servicio público educativo en todos los niveles y formas, sean estos públicos o privados.</p> <p>La ley determinará la estructura, funciones y la financiación de la Superintendencia de Educación.</p> <p>La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.</p> | <p>El Estado, a través de la Superintendencia de Educación, ejercerá la suprema inspección, vigilancia y control sobre los prestadores del servicio público educativo en todos los niveles y formas, sean estos públicos o privados.</p> <p>La ley determinará la estructura, funciones y la financiación de la Superintendencia de Educación.</p> <p>La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.</p> | |
| <p>Artículo 2°. Modifíquese el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones, requisitos y sus obligaciones para su creación. La comunidad educativa participará en la dirección y funcionamiento de las instituciones de educación, de manera democrática, participativa y directa; se prohíbe cualquier forma de delegación para la elección directa de sus representantes.</p> <p>La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.</p> <p>La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.</p> <p>Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa, ni podrá ser discriminada por sus preferencias religiosas, por su orientación sexual o por cualquier tipo de discapacidad.</p> <p>Los integrantes de los grupos campesinos tendrán derecho a una formación con modelos diferenciales que potencie las capacidades agrícolas, agropecuarias y agroecológicas.</p> <p>La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, con capacidades excepcionales, y reducir la deserción o descolarización en los niveles señalados en el inciso 4 del artículo 67 son obligaciones especiales del Estado.</p> | <p>Artículo 2°. Modifíquese el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones, requisitos y sus obligaciones para su creación. La comunidad educativa participará en la dirección y funcionamiento de las instituciones de educación, de manera democrática, participativa y directa; se prohíbe cualquier forma de delegación que sustituya la elección directa de los representantes de los estamentos de la comunidad educativa en los órganos de dirección.</p> <p>La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.</p> <p>La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.</p> <p>Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa, ni podrá ser discriminada por sus preferencias religiosas, por su orientación sexual o por cualquier tipo de capacidad reducida o condiciones diferenciales.</p> <p>Los integrantes de los grupos campesinos tendrán derecho a una formación con modelos diferenciales que potencie las capacidades agrícolas, agropecuarias y agroecológicas.</p> <p>La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, con capacidades excepcionales o diferenciales; y reducir la deserción o descolarización en los niveles señalados en el inciso 5 del artículo 67 son obligaciones especiales del Estado.</p> | <p>Se modifican los incisos 2, 5, 7 y 8 final para dejarlo acorde con la intención planteada, toda vez que, hace alusión al inciso 4° del artículo 67, cuando en realidad es el inciso 5°</p> |
| <p>Artículo 3°. Modifíquese el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 69. Se garantiza la autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Las Instituciones de Educación Superior podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos; las cuales serán supervisadas y vigiladas de conformidad con la ley.</p> | <p>Artículo 3°. Modifíquese el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 69. Se garantiza la autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Las Instituciones de Educación Superior podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos; las cuales serán supervisadas y vigiladas de conformidad con la ley.</p> | <p>Se acoge la propuesta modificatoria del inciso 3° del honorable Representante Juan Daniel Peñuela; y se delimita el inciso final para la población más vulnerable.</p> |

| Texto aprobado en Primer Debate | Texto Propuesto para Segundo Debate | Observación |
|---|---|-------------|
| <p>La ley establecerá un régimen especial para las Instituciones de Educación Superior del Estado. En relación al régimen contractual especial debe estar sujeto a los principios v modalidades del Estatuto General de la Contratación Pública.</p> <p>El Estado fortalecerá el desarrollo de las condiciones para la investigación científica en las Instituciones de Educación Superior oficiales.</p> <p>El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso y permanencia de todas las personas a la educación superior. Para tal efecto garantizará la implementación de políticas públicas que contribuyan económica y laboralmente en el cumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas por los beneficiarios del acceso a la educación superior y que gradualmente garanticen el acceso gratuito a las instituciones de educación superior del Estado asegurando la adecuada financiación de las mismas.</p> | <p>La ley establecerá un régimen especial para las Instituciones de Educación Superior del Estado. En relación al régimen contractual especial debe estar sujeto a los principios v modalidades del Estatuto General de la Contratación Pública.</p> <p>El Estado fortalecerá el desarrollo de sus condiciones y apoyará la investigación científica en las Instituciones de Educación Superior oficiales y privadas.</p> <p>El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso y permanencia de todas las personas a la educación superior. Para tal efecto garantizará la implementación de políticas públicas que contribuyan económica y laboralmente en el cumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas por los beneficiarios del acceso a la educación superior y que gradualmente garanticen el acceso gratuito a las instituciones de educación superior del Estado; a los sectores más vulnerables de la sociedad; asegurando la adecuada financiación de las mismas.</p> | |
| <p>Artículo 4°. Modifíquese el numeral 21 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así: Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos. 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. 3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República. 4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. 5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. 6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso. 7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. 8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura. | <p>Artículo 4°. Modifíquese el numeral 21 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así: Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos. 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. 3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República. 4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. 5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. 6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso. 7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. 8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura. | |

| Texto aprobado en Primer Debate | Texto Propuesto para Segundo Debate | Observación |
|---|---|-------------|
| <p>9. Sancionar las leyes.</p> <p>10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.</p> <p>11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.</p> <p>12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura.</p> <p>13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley.</p> <p>En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes.</p> <p>14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.</p> <p>15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley.</p> <p>16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley.</p> <p>17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos.</p> <p>18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros.</p> <p>19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 173.</p> <p>20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.</p> <p>21. Ejercer la inspección, vigilancia y control de las condiciones y prestación del servicio educativo a través de la Superintendencia de Educación de conformidad con la ley.</p> | <p>9. Sancionar las leyes.</p> <p>10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.</p> <p>11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.</p> <p>12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura.</p> <p>13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley.</p> <p>En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes.</p> <p>14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.</p> <p>15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley.</p> <p>16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley.</p> <p>17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos.</p> <p>18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros.</p> <p>19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 173.</p> <p>20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.</p> <p>21. Ejercer la inspección, vigilancia y control de las condiciones y prestación del servicio educativo a través de la Superintendencia de Educación de conformidad con la ley.</p> | |

| Texto aprobado en Primer Debate | Texto Propuesto para Segundo Debate | Observación |
|--|--|-------------|
| 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. 23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley. 24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. 25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. 26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores. 27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley. 28. Expedir cartas de naturalización, conforme a la ley. | 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. 23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley. 24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. 25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. 26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores. 27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley. 28. Expedir cartas de naturalización, conforme a la ley. | |
| Artículo 5°. <i>Vigencia.</i> El presente acto legislativo, rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. | Artículo 5°. <i>Vigencia.</i> El presente acto legislativo, rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. | |

10. CONFLICTOS DE INTERÉS.

Dando alcance a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 2003 de 2019, “*Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992*”, se hacen las siguientes consideraciones a fin de describir la circunstancias o eventos que podrían generar conflicto de interés en la discusión y votación de la presente iniciativa legislativa, de conformidad con el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1° de la Ley 2003 de 2019, que reza:

“*Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los congresistas deberán declarar los conflictos De intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones.*

Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.

A) *Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina*

obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

B) *Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.*

C) *Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. (...)*”

Sobre este asunto la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Honorable Consejo de Estado en su sentencia 02830 del 16 de julio de 2019, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, señaló que:

“*No cualquier interés configura la causal de desinversión en comento, pues se sabe que solo lo*

será aquel del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”.

Por lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo citado, me permito señalar que en el trámite de este Proyecto podrían presentarse conflictos de interés por parte de aquellos congresistas que por tener familiares dentro de los grados de consanguinidad y afinidad consagrados en la ley que hagan parte de los niveles directivos de las diferentes Instituciones Educativas que podrían obtener beneficios directos o actuales del presente proyecto.

11. PROPOSICIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones, presento ponencia positiva y, en consecuencia, solicito a los Honorables Representantes que integran la Plenaria de la Cámara de Representantes, dar Segundo Debate al Proyecto de Acto Legislativo número 120 de 2022 Cámara “*Por medio del cual se modifican los artículos 67, 68, 69 y 189 de la Constitución Política, y se crea la Superintendencia de Educación*” en Primera Vuelta, con base al pliego de modificaciones propuesto.

Cordialmente,


JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA
 Representante a la Cámara

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 120 DE 2022 CÁMARA

por medio del cual se modifican los artículos 67, 68, 69 y 189 de la Constitución Política, y se crea la Superintendencia de Educación - en Primera Vuelta

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura; y deberá ser de calidad y con pertinencia, con el objeto de formar personas capaces de alcanzar la felicidad y de aportar el desarrollo económico del país.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; en principios y valores que garanticen comportamientos éticos sobre el respeto a la vida, a la honra de las personas, a la diversidad étnica y cultural, a los bienes y recursos del Estado y de las personas; en la generación de riqueza y el desarrollo de inteligencia financiera y en la práctica del trabajo, el deporte y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria desde la educación inicial, entre los cero (0) y cinco (5) años, hasta la educación superior en igualdad de condiciones, inclusiva, de calidad y pertinencia para todas las personas.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y garantizar la calidad de la educación desde la primera infancia hasta la superior; el cumplimiento de sus fines, la formación integral, moral, ética, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

El Estado, a través de la Superintendencia de Educación, ejercerá la suprema inspección, vigilancia y control sobre los prestadores del servicio público educativo en todos los niveles y formas, sean estos públicos o privados.

La ley determinará la estructura, funciones y la financiación de la Superintendencia de Educación.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:

Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones, requisitos y sus obligaciones para su creación.

La comunidad educativa participará en la dirección y funcionamiento de las instituciones de educación, de manera democrática, participativa y directa; se prohíbe cualquier forma de delegación que sustituya la elección directa de los representantes de los estamentos de la comunidad educativa en los órganos de dirección.

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.

La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los

establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa, ni podrá ser discriminada por sus preferencias religiosas, por su orientación sexual o por cualquier tipo de capacidad reducida o condiciones diferenciales.

Los integrantes de los grupos campesinos tendrán derecho a una formación con modelos diferenciales que potencie las capacidades agrícolas, agropecuarias y agroecológicas.

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, con capacidades excepcionales o diferenciales; y reducir la deserción o descolarización en los niveles señalados en el inciso 5 del artículo 67 son obligaciones especiales del Estado.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:

Artículo 69. Se garantiza la autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Las Instituciones de Educación Superior podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos; las cuales serán supervisadas y vigiladas de conformidad con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las Instituciones de Educación Superior del Estado. En relación al régimen contractual especial debe estar sujeto a los principios y modalidades del Estatuto General de la Contratación Pública.

El Estado fortalecerá el desarrollo de sus condiciones y apoyará la investigación científica en las Instituciones de Educación Superior oficiales y privadas.

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso y permanencia de todas las personas a la educación superior. Para tal efecto garantizará la implementación de políticas públicas que contribuyan económica y laboralmente en el cumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas por los beneficiarios del acceso a la educación superior y que gradualmente garanticen el acceso gratuito a las instituciones de educación superior del Estado; a los sectores más vulnerables de la sociedad; asegurando la adecuada financiación de las mismas.

Artículo 4°. Modifíquese el numeral 21 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:

Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos.
2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios

que se someterán a la aprobación del Congreso.

3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.
4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.
6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.
7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.
8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura.
9. Sancionar las leyes.
10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura.
13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley.

En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes.

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley.

16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley.
17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos.
18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros.
19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 173.
20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.
21. Ejercer la inspección, vigilancia y control de las condiciones y prestación del servicio educativo a través de la Superintendencia de Educación de conformidad con la ley.
22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.
23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley.
24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.
25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley.
26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.
27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley.
28. Expedir cartas de naturalización, conforme a la ley.

Artículo 5°. *Vigencia.* El presente acto legislativo, rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.


JORGE ELIÉCER TAMAYO MARULANDA
 Representante a la Cámara

TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES EN PRIMER DEBATE PRIMERA VUELTA AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 120 DE 2022 CÁMARA

por medio del cual se modifican los artículos 67, 68, 69 y 189 de la Constitución Política, y se crea la Superintendencia de Educación

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura; y deberá ser de calidad y con pertinencia.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo, el deporte y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria desde la educación inicial, entre los cero (0) y cinco (5) años, hasta la educación superior.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragados.

Corresponde al Estado regular y garantizar la calidad de la educación desde la primera infancia hasta la superior; el cumplimiento de sus fines, la formación integral, moral, ética, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

El Estado, a través de la Superintendencia de Educación; ejercerá la suprema inspección, control y vigilancia sobre los prestadores del servicio público educativo en todos los niveles y formas, sean estos públicos o privados.

La ley determinará la estructura, funciones y la financiación de la Superintendencia de Educación.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los

servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia; el cual quedará así:

Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones, requisitos y sus obligaciones para su creación.

La comunidad educativa participará en la dirección y funcionamiento de las instituciones de educación, de manera democrática, participativa y directa; se prohíbe cualquier forma de delegación para la elección directa de sus representantes.

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.

La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa, ni podrá ser discriminada por sus preferencias religiosas, por su orientación sexual o por cualquier tipo de discapacidad.

Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a que se garantice una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

Los integrantes de los grupos campesinos tendrán derecho a una formación con modelos diferenciales que potencie las capacidades agrícolas, agropecuarias y argoecológicas.

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, con capacidades excepcionales, y reducir la deserción o desescolarización en los niveles señalados en el inciso 4 del Artículo 67 son obligaciones especiales del Estado.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:

Artículo 69. Se garantiza la autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Las Instituciones de Educación Superior podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos; las cuales serán supervisadas y vigiladas de conformidad con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las Instituciones de Educación Superior del Estado. En relación al régimen contractual especial debe estar sujeto a los principios y modalidades del Estatuto General de la Contratación Pública.

El Estado fortalecerá el desarrollo de las condiciones para la investigación científica en las Instituciones de Educación Superior oficiales.

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso y permanencia de todas las personas a la educación superior. Para tal efecto garantizará la implementación de políticas públicas

que contribuyan económica y laboralmente en el cumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas por los beneficiarios del acceso a la educación superior y que gradualmente garanticen el acceso gratuito a las instituciones de educación superior del Estado asegurando la adecuada financiación de las mismas.

Artículo 4°. Modifíquese el numeral 21 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:

Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos.
2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.
3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.
4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.
6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.
7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.
8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura.
9. Sancionar las leyes.
10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura.

13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley.

En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes.

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley.

16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley.

17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos.

18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros.

19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para probación del Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 173.

20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.

21. Ejercer la inspección, vigilancia y control de las condiciones y prestación del servicio educativo a través de la Superintendencia de Educación de conformidad con la ley.

22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley.

24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.

25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del abono de terceros de acuerdo con la ley.

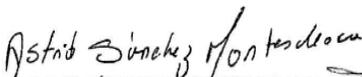
26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.

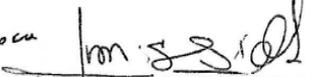
27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley.

28. Expedir cartas de naturalización, conforme a la ley.

Artículo 5°. Vigencia. El presente acto legislativo, rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

En los anteriores términos fue aprobado con modificaciones el presente Proyecto de Acto Legislativo según consta en Acta número 21 de Sesión de octubre 20 de 2022. Anunciado entre otras fechas el 18 de octubre de 2022 según consta en Acta número 20.


ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA
Ponente Coordinadora Único


JUAN CARLOS WILLS OSPINA
Presidente


AMPARO V. CALDERÓN PERDOMO
Secretaria

CONTENIDO

Gaceta número 1330 - Jueves, 27 de octubre de 2022
CÁMARA DE REPRESENTANTES
PONENCIAS

Ponencia para primer debate, pliego de modificaciones y texto propuesto al Proyecto de ley número 203 de 2022 Cámara, por medio del cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 30 años del departamento del Guaviare, se exalta su riqueza natural y se dictan otras disposiciones..... 1

Informe de ponencia para segundo debate, pliego de modificaciones, texto propuesto y texto aprobado en la Comisión Primera del Proyecto de Acto legislativo número 120 de 2022 Cámara, por medio del cual se modifican los artículos 67, 68, 69 y 189 de la Constitución Política, y se crea la Superintendencia de Educación..... 7